

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1993/NGO/33  
16 de febrero de 1993

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
49º período de sesiones  
Tema 3 del programa

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DEL PERIODO DE SESIONES

Exposición presentada por escrito por Defensores de los Derechos  
Humanos, organización no gubernamental reconocida como  
entidad consultiva de la Categoría II

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social.

[12 de febrero de 1993]

RELACION ENTRE LAS FUERZAS DE DEFENSA CIVIL Y LOS DERECHOS  
HUMANOS - LA SITUACION EN GUATEMALA

1. En su resolución 1992/57 de 3 de marzo de 1992, titulada "Fuerzas de defensa civil", la Comisión de Derechos Humanos reconoció "que, en circunstancias excepcionales, cuando las fuerzas públicas no puedan actuar debido a las exigencias de la situación, puede ser necesario establecer fuerzas de defensa civil para proteger a la población civil". Sin embargo, incluso las fuerzas de defensa civil que se establecen en supuestas "circunstancias excepcionales" pueden violar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en lo sucesivo denominados "los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas").

GE.93-10760/9350f (S)

2. La Comisión pidió información acerca de la relación entre las fuerzas de defensa civil y los derechos humanos. Defensores de los Derechos Humanos responde por la presente refiriéndose a la situación en Guatemala.

3. Para conocer un examen más completo de las cuestiones resumidas aquí consúltese el documento de Defensores de los Derechos Humanos titulado "Las fuerzas de defensa civil en Guatemala", preparado en respuesta a la resolución 1992/57 de la Comisión y que estará disponible en el presente período de sesiones.

4. Las fuerzas de defensa civil de Guatemala, conocidas con el nombre de patrullas civiles, son grupos de campesinos y aldeanos, casi siempre formados exclusivamente por guatemaltecos indígenas, organizados y controlados por el ejército con la pretendida finalidad de combatir a las guerrillas antigubernamentales. Si bien el Gobierno de Guatemala afirma que el servicio en las patrullas es estrictamente voluntario, todos los indicios apuntan al hecho de que los campesinos indígenas son obligados a prestar servicios en las patrullas, a menudo bajo amenaza de muerte, en violación directa del artículo 34 de la Constitución de Guatemala, que garantiza que "nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares". Sean o no necesarias las patrullas civiles "para proteger a la población civil", es evidente que no lo han sido durante muchos años. En 1983 el Gobierno de Guatemala puso fin al estado de excepción reconociendo que habían desaparecido las "circunstancias excepcionales" que dieron lugar a la creación de las patrullas civiles y servían de justificación de su mantenimiento.

5. Con la disminución de la actividad y el número de las guerrillas (que descendió de 10.000 combatientes en 1980 a 800 en 1989) <sup>1/</sup>, los insurgentes que existan todavía en Guatemala no suponen una gran amenaza para la población del país y en modo alguno exigen o justifican la existencia de miles de patrulleros civiles que recorren el campo y aterrorizan a la población rural. Americas Watch señaló que cuando la actividad de las patrullas civiles era más intensa, en 1983, participaban en ellas más de un millón de hombres. Seis años más tarde, después de tres años de gobierno civil, había todavía unos 600.000 patrulleros, aunque se reconocía que la amenaza de las guerrillas era insignificante.

---

<sup>1/</sup> En el presente documento no se darán referencias puesto que en el informe de Defensores de los Derechos Humanos figura una lista completa de fuentes de la información contenida en este resumen.

El derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a tortura

6. Los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas protegen el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, así como el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El sistema de patrullas civiles viola los derechos humanos fundamentales de los propios patrulleros y de sus víctimas.

7. El experto independiente de las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos han recibido numerosos informes en el sentido de que los patrulleros civiles han sido víctimas y autores de ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos, detenciones ilegales y desapariciones. Estas violaciones de los derechos humanos, que se iniciaron en 1982 con la introducción del sistema de patrullas civiles, no han disminuido ni en número ni en gravedad, incluso después del paso de un gobierno militar a un gobierno civil. Por el contrario, las patrullas se han convertido en un elemento institucionalizado de violencia incontrolable.

Derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y asociación forzosa

8. Los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas protegen el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y asociación forzosa. Si bien se permite que los gobiernos exijan a sus ciudadanos ciertas formas de trabajo, el sistema de patrullas civiles en Guatemala exige el tipo de trabajo forzoso que es claramente inadmisible en virtud de la Declaración y del Pacto.

9. Muchos habitantes de las zonas rurales siguen siendo obligados a unirse a las patrullas. Quien se niega a unirse a las patrullas queda inmediatamente segregado, se le somete a investigación, se le hostiga y, lo que es aún peor, se le acusa de ser un presunto simpatizante de la subversión o de practicar la subversión de manera encubierta. Quienes se niegan a patrullar son objeto de amenazas de muerte y de violencia física.

10. Los patrulleros están obligados a ser "los ojos y los oídos del ejército", espiar a sus conciudadanos e informar al ejército. Están obligados también a llevar y utilizar armas, poniendo así en peligro su vida.

11. Además, hay gran número de campesinos que dependen de los ingresos obtenidos del trabajo agrícola estacional para mantenerse y mantener a sus familias. Los que son obligados a patrullar no pueden salir de sus aldeas por ninguna razón y por consiguiente no pueden realizar los trabajos migratorios estacionales de que dependen.

Libertad de pensamiento, conciencia, religión y opinión

12. Los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas protegen los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y opinión. Estos derechos son violados habitualmente por el sistema de patrullas civiles.

13. En las aldeas en que funcionan las patrullas todos los varones adultos (y a menudo también los menores) son obligados a patrullar, sin exenciones ni matizaciones en favor de personas cuya religión o cuya conciencia les impiden participar en actividades violentas. Algunos patrulleros son obligados a matar a civiles, en violación directa de sus principios religiosos más fundamentales. Además, es usual amenazar, detener, golpear o matar a una persona simplemente por expresar opiniones contra las patrullas o no estar dispuesta a prestar servicios en ellas o por unirse a organizaciones antipatrullas.

Igualdad, no discriminación e igualdad de acceso al sistema judicial

14. Los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas protegen el derecho a la igualdad y la no discriminación, así como el derecho a la igualdad de acceso al sistema judicial. La población indígena de Guatemala es objeto de discriminación al ser obligada a unirse a las patrullas civiles y al ser convertida en blanco de la violencia de las patrullas.

15. Según Americas Watch las patrullas tienen un carácter inherentemente racista, pues se han impuesto casi exclusivamente a los indios en las tierras altas de Guatemala. Además, las personas que tratan de denunciar ante la justicia las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las patrullas se enfrentan con un ordenamiento jurídico discriminatorio que sirve para proteger al ejército y a los patrulleros de sanciones o penas.

Libertad de circulación

16. Los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas protegen el derecho a la libertad de circulación. Muchos campesinos de Guatemala son obligados por las patrullas civiles a abandonar sus hogares, mediante orden directa o por miedo de la violencia de las patrullas civiles. Como se señaló en el párrafo 11, en ciertas circunstancias a los patrulleros se les impide salir de sus aldeas.

Protección especial de los niños

17. Los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas protegen a los niños de la explotación económica y social. No obstante, los niños son habitualmente objeto de explotación y abusos al ser obligados a prestar servicio en las patrullas civiles.

18. Los padres que no pueden patrullar han de enviar a sus hijos en su lugar, aunque éstos sean menores. En algunos casos se obliga a patrullar hasta a niños de ocho años y la inexperiencia de los niños con armas de fuego ha dado lugar a muchos accidentes fatales.

### Conclusión

19. Como demuestra la información que precede, las patrullas civiles de Guatemala violan sistemáticamente no sólo el derecho interno sino también muchos de los derechos humanos fundamentales garantizados a todas las personas por instrumentos de las Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El sistema de las patrullas civiles ha sido rotundamente condenado por organizaciones de derechos humanos del país, así como por organizaciones no gubernamentales internacionales como Americas Watch y Amnistía Internacional y por órganos de las Naciones Unidas como la Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General. El experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala que informa a la Comisión de Derechos Humanos, Sr. Christian Tomuschat, ha pedido que se supriman las patrullas civiles por ser una forma de servidumbre involuntaria y la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido al Gobierno de Guatemala que elimine la participación forzosa en las patrullas.

20. Sin embargo, aun frente a esas presiones, el Gobierno de Guatemala se ha negado resueltamente a suprimir las patrullas civiles o incluso a modificarlas para crear un sistema de patrullas de carácter verdaderamente voluntario. Hasta hoy las patrullas -con la aprobación del Gobierno- siguen violando los derechos humanos de los guatemaltecos de las zonas rurales protegidos por normas internas e internacionales. Por consiguiente, instamos a la Comisión de Derechos Humanos a que decida que el experto independiente siga indicando al Gobierno de Guatemala las medidas que deben adoptarse para eliminar las patrullas civiles y que presente su informe a la Comisión en su próximo período de sesiones. También instamos a la Comisión a que condene firmemente la persistencia de las violaciones de los derechos humanos en Guatemala.

-----